



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/48/572
9 de noviembre de 1993
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Cuadragésimo octavo período de sesiones
Tema 120 del programa

INFORMES FINANCIEROS Y ESTADOS FINANCIEROS COMPROBADOS E INFORMES DE LA JUNTA DE AUDITORES

Recuperación de fondos apropiados indebidamente por funcionarios y ex funcionarios

Informe del Secretario General

I. INTRODUCCION

1. En el párrafo 13 de su resolución 47/211, de 23 de diciembre de 1992, la Asamblea General pidió al Secretario General que le presentara propuestas sobre:

"a) El establecimiento de mecanismos jurídicos eficaces para recuperar los fondos apropiados indebidamente, como recomienda la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en el párrafo 53 de su informe¹;

b) El enjuiciamiento penal de las personas que hayan hecho víctima de fraudes a la Organización."

2. En el párrafo 53 de su informe¹, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto señaló:

"53. La Junta ha informado de casos de fraude y presunción de fraude en los párrafos 355 a 368 de su informe, así como en el párrafo 126, en relación con un incidente de apropiación indebida de fondos en la CEPA por una suma de aproximadamente 125.000 dólares. La Comisión observa que, en un número apreciable de casos, los esfuerzos desplegados para recuperar fondos apropiados indebidamente u otras pérdidas de la Organización han sido insignificantes o no han tenido éxito, en algunos casos debido a que la persona del caso ha abandonado la jurisdicción de las Naciones Unidas. En vista de ello, la Comisión Consultiva sugiere que la Administración, con la ayuda del Asesor Jurídico, estudie la posibilidad de establecer un mecanismo que permita llegar a acuerdos u otras disposiciones entre las Naciones Unidas y todos los Estados Miembros, con el objeto de que la

Organización pueda perseguir judicialmente a las personas culpadas de apropiación indebida de fondos y tratar de obtener reparaciones y la recuperación de los fondos. Debe también estudiarse la posibilidad de recuperar los fondos recurriendo a las prestaciones de pensión de las personas del caso."

3. El presente informe se ha preparado en respuesta a esa solicitud.

II. PRACTICA ACTUAL

A. Medidas internas

1. Recuperación de las sumas apropiadas indebidamente mediante la retención de sueldos y emolumentos pendientes de pago

4. Conforme a lo dispuesto en la regla 103.18 b) ii) del Reglamento del Personal, las sumas adeudadas a las Naciones Unidas pueden deducirse de sueldos, salarios y otros emolumentos. En los casos en que se ha determinado que un funcionario se ha apropiado indebidamente de fondos de la Organización, se procurará como primera medida recuperar las sumas en cuestión reteniendo el sueldo del funcionario y otros emolumentos pendientes de pago, incluidos los pagos por separación del servicio. Prácticamente todos los casos en que se consigue recuperar la totalidad de lo adeudado, se resuelven por ese procedimiento.

5. No obstante, como señaló la Comisión Consultiva, en algunos casos las sumas recuperadas han sido insignificantes, ya que el total de los fondos apropiados indebidamente era muy superior a cualquier suma a que pudiera haber tenido derecho el funcionario. En los casos en que el funcionario había dejado de trabajar en las Naciones Unidas y había recibido todas las sumas que le correspondían por separación del servicio antes de que se descubriera el presunto fraude, por lo general no se pudo recuperar ni siquiera una parte de los fondos apropiados indebidamente, excepto cuando la persona había sido contratada por otra organización del sistema de las Naciones Unidas y pudo llegarse a un acuerdo con esa organización para que recuperara los fondos en nombre de las Naciones Unidas.

2. Prestaciones del régimen de pensiones

6. Tradicionalmente, el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas ha denegado a la Administración el derecho a recuperar las sumas que se le adeudaban deduciéndolas directamente de las prestaciones de pensión de los miembros del personal, aduciendo que en los Estatutos y Reglamentos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, promulgados por la Asamblea General, se excluía la posibilidad de recuperar sumas adeudadas a la Organización deduciéndolas de las prestaciones de pensión de un miembro del personal separado del servicio. Asimismo, el Tribunal sostenía que la Administración no podía negarse a expedir la documentación necesaria para la tramitación de las prestaciones del régimen de pensiones de los funcionarios con el propósito de inducir al ex funcionario a devolver a la Organización los fondos apropiados indebidamente. No obstante, el Tribunal consideraba que la

/...

Administración no podía quedar indefensa ante esos casos, por lo que sugería que la Administración y la Caja Común de Pensiones buscaran una solución adecuada a ese tipo de situaciones.

7. En consecuencia, el Secretario General enmendó la instrucción administrativa relativa a los formularios de liquidación, a fin de incluir la cuestión de la no expedición de los documentos necesarios para tramitar las prestaciones del régimen de pensiones tras la separación del servicio. Las disposiciones pertinentes de la instrucción administrativa enmendada² son las siguientes:

"11. De conformidad con sus obligaciones contractuales para con las Naciones Unidas, los funcionarios que se separen del servicio tienen la responsabilidad de:

a) Saldar sus deudas con las Naciones Unidas;

...

d) Proporcionar, de conformidad con la regla 104.4 del Reglamento del Personal, las pruebas documentales necesarias para verificar el cumplimiento de las responsabilidades enumeradas más arriba.

12. El Secretario General Adjunto de Administración y Gestión puede negarse a expedir el formulario P.35 (formulario de liquidación) o aplazar su emisión hasta que el funcionario haya cumplido de manera satisfactoria los requisitos estipulados en el párrafo 11 supra.

13. Se recuerda a los funcionarios que si no se expide el formulario P.35 no podrán recibir sus prestaciones del régimen de pensiones, ya que para su tramitación la Caja Común de Pensiones necesita ese formulario. También se recuerda al personal que el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el párrafo 11 supra puede entrañar la suspensión del trámite de separación del servicio, lo cual a su vez puede demorar el pago de otras sumas adeudadas al funcionario ..."

8. El Secretario General cree que este procedimiento tal vez aliente ex funcionarios a saldar sus deudas con la Organización. No obstante, conviene tener en cuenta que el Tribunal aún no ha tenido oportunidad de examinar esa instrucción.

9. Con respecto a la posibilidad de retener directamente prestaciones de pensión como forma de recuperar sumas adeudadas por ex funcionarios, el Secretario General observa que la pensión se suele considerar como una prestación de carácter social para la familia y que, evidentemente, las prestaciones recibidas por la familia se habrán reducido ya al ser destituido por fraude del funcionario. De incorporarse una disposición de esa índole a los Estatutos y Reglamentos de la Caja Común de Pensiones, el Secretario de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas tendría que determinar tanto la existencia como el monto de la deuda y luego el nivel apropiado de las deducciones de la pensión. Además, habría que otorgar al

/...

Tribunal Administrativo jurisdicción para examinar los recursos interpuestos contra esas decisiones, y permitir a la organización interesada presentar pruebas de la existencia de la deuda.

10. Es dudoso que corresponda a la Caja Común de Pensiones cargar con los gastos de ese procedimiento, por lo que la organización interesada tendría que reintegrar a la Caja Común de Pensiones todos los gastos correspondientes. Si la Asamblea General decidiera estudiar esa opción, que exige la enmienda de los Estatutos y Reglamentos de la Caja Común de Pensiones, tendría que consultar ante todo a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para que ésta le comunicara su opinión al respecto, según lo dispuesto en esos Estatutos y Reglamentos³.

B. Medidas externas

1. Observaciones generales

11. El Artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas estipula que la Organización gozará en el territorio de cada uno de sus Estados Miembros, "de la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos". En la sección 1 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas⁴ (Convención General) se prevé que las Naciones Unidas tendrán personalidad jurídica y estarán capacitadas para contratar, adquirir y disponer de propiedades, inmuebles y muebles, y entablar procedimientos judiciales. Estas disposiciones le permiten iniciar acciones judiciales en tribunales nacionales.

2. Procedimientos civiles para la recuperación de los fondos

12. Para incoar un procedimiento civil con el fin de recuperar fondos indebidamente apropiados es preciso disponer de pruebas del fraude cometido por los funcionarios en cuestión. A ese respecto se plantea un problema de carácter general cuando el supuesto fraude ha consistido en una contravención de reglamentos o reglamentaciones internos de las Naciones Unidas (por ejemplo, en los casos en que se hayan solicitado y obtenido de las Naciones Unidas reembolsos excesivos o no justificados por concepto de gastos médicos, subsidio de educación o impuestos sobre la renta). En tales casos, para dilucidar si los actos de los funcionarios en cuestión fueron fraudulentos, el tribunal nacional tendría que interpretar y aplicar las disposiciones de los reglamentos o reglamentaciones internos de la Organización presuntamente violadas por los funcionarios en cuestión.

13. Sin embargo, en muchos países los tribunales nacionales pueden encontrar dificultades, o incluso impedimentos legales, para aplicar normas internas de una organización intergubernamental que no tengan fuerza de ley en el ordenamiento jurídico del país, a menos que se trate de las escasas normas promulgadas en cumplimiento del Acuerdo relativo a la Sede que excluyen expresamente la aplicación de las leyes nacionales. Además, al someterse a tribunales nacionales controversias relacionadas con reglamentos o reglamentaciones internos, esos tribunales podrían dar interpretaciones que

contradijeran las de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas o que no concordaran con las políticas y los intereses de la Organización.

14. Esas dificultades no se plantean si el acto cometido por el funcionario constituye en sí mismo, un delito en el ordenamiento jurídico nacional, independientemente de los reglamentos y reglamentaciones de las Naciones Unidas (así, por ejemplo, cuando el acusado ha robado o dañado propiedad de las Naciones Unidas). Desde un punto de vista práctico, en tales casos es factible obtener reparación si el acusado es solvente y se encuentra físicamente dentro de la jurisdicción del país en que ocurrió el supuesto fraude o en el que se dispone de pruebas del delito, en particular si el acto fraudulento se cometió dentro de esa jurisdicción en connivencia con personal ajeno a las Naciones Unidas, por lo que existen coautores de los que también se puede exigir resarcimiento.

15. La recuperación de lo perdido resulta mucho más difícil si el funcionario ha abandonado el país donde se cometió el fraude. En ese caso, para poder incoar un procedimiento suele ser necesario requerir la asistencia de las autoridades judiciales del país en el que resida actualmente el funcionario. Las perspectivas de obtener reparación dependerán entonces, entre otros factores, de la existencia de un acuerdo de cooperación judicial entre el país en que se entable el procedimiento y el país donde haya ocurrido el fraude. De no existir tal acuerdo, normalmente será necesario transmitir por conducto diplomático al otro país una solicitud de asistencia judicial, lo que entrañará la intervención de tribunales superiores o de altos funcionarios de los dos países en cuestión.

16. Además, la autenticación y traducción de los documentos pertinentes, las minutas de los interrogatorios y la documentación adjunta al idioma del tribunal requerido y la traducción del expediente de ese tribunal al idioma oficial del tribunal requirente pueden suponer para la Organización demoras y gastos considerables. Los costos se incrementan considerablemente por la necesidad de contratar los servicios de abogados en por lo menos dos países diferentes y de enviar a funcionarios de la Sede de las Naciones Unidas para que asistan al juicio, celebrado en un lugar diferente a aquel donde se cometió el fraude.

17. En cualquier caso, la eficacia del procedimiento dependerá de la medida en que las leyes que haya de aplicar el tribunal hagan factible la recuperación de los fondos. Las pruebas exigidas por los tribunales competentes para demostrar la existencia de conducta fraudulenta difieren de un país a otro. Por ejemplo, en algunos Estados es muy difícil conseguir que se acepten como pruebas grabaciones, transcripciones de conversaciones telefónicas u otros elementos probatorios obtenidos por medios mecánicos, por lo que esos elementos resultan prácticamente inútiles. En los casos de apropiación indebida de fondos por medio de transacciones bancarias, la legislación nacional sobre el secreto bancario y la limitación de la responsabilidad de los bancos puede reducir también las probabilidades de que las Naciones Unidas consigan recuperar los fondos.

18. Teniendo en cuenta esas dificultades, en los casos en los que interviene la jurisdicción de diferentes Estados, las probabilidades de recuperar los fondos con cierta prontitud y a un costo aceptable son escasas.

3. Procedimientos penales

19. La jurisdicción penal se ha considerado siempre uno de los atributos esenciales de la soberanía, por lo que el enjuiciamiento penal es potestad de las autoridades penales nacionales. Esas autoridades nacionales evaluarán las acusaciones de actos delictivos y decidirán si los hechos del caso cumplen los requisitos nacionales para la continuación de las investigaciones y la instrucción de la causa.

20. El Secretario General ha pedido en diversas ocasiones a las autoridades nacionales que investiguen presuntos fraudes contra las Naciones Unidas cometidos por terceras partes o por ex funcionarios de la Organización. Sin embargo, las comprobaciones de cuentas que conducen al despido de los funcionarios no suelen estar respaldadas por el tipo de pruebas que exige la legislación nacional para fundamentar una sentencia condenatoria, puesto que el Secretario General no cuenta con los poderes de investigación policial necesarios para probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable (por ejemplo, poder de emplazamiento o citación para exigir la entrega de documentos bancarios o financieros del acusado o de su familia, obtener testimonios bajo juramento, etc.). Además, las autoridades nacionales se muestran con frecuencia renuentes a iniciar actuaciones penales a menos que la cantidad apropiada indebidamente sea considerable.

21. En general, un procedimiento penal puede prosperar si en el momento en que se incoa el ex funcionario o algún cómplice externo están físicamente presentes en el momento en que se entable la acción en el país dentro de cuya jurisdicción se cometió el delito. Para ello es necesario, claro está, que la Organización descubra el fraude antes de que la persona en cuestión abandone el país. El Secretario General se ha comprometido a mejorar los procedimientos de control internos con el fin de que cuando se sospeche que se ha cometido un fraude, se pueda informar inmediatamente a los organismos nacionales de investigación penal (véanse los documentos A/42/437 y A/47/510).

22. Si el funcionario en cuestión ha abandonado, antes de que se inicie la causa, el país dentro de cuya jurisdicción se cometió el fraude, la necesidad de obtener la extradición del acusado planteará graves dificultades. Las leyes del Estado que habría de conceder la extradición pueden prohibirla por diversos motivos⁵. Cabe señalar que las Naciones Unidas han hecho considerables esfuerzos por lograr una cooperación internacional más eficaz en cuestiones penales, entre otras cosas recomendando a los Estados Miembros que concierten acuerdos internacionales adecuados a tal efecto⁶. Sin embargo, a pesar de las disposiciones existentes de asistencia y cooperación internacional, los procedimientos de extradición suelen entrañar demoras considerables.

23. Los tribunales de algunos países pueden iniciar una actuación penal aun cuando el supuesto delito no se haya cometido dentro de su jurisdicción (por ejemplo, si el acusado reside en un lugar situado dentro de su jurisdicción). Sin embargo, en ese caso será necesario reunir pruebas en el extranjero u obtener el testimonio de testigos que residen en otros países. Ese proceso puede resultar complejo y exigir mucho tiempo, y es probable que las autoridades nacionales se muestren reacias a iniciarlo.

24. En resumen, para conseguir el enjuiciamiento de los autores de fraudes de los que sean víctimas las Naciones Unidas es necesario contar con la plena cooperación de los Estados Miembros. Además, suele ser preciso que el acusado o por lo menos sus cómplices se hallen físicamente presentes en el momento en que se inicie el procedimiento en el Estado en el que se cometió el fraude.

III. REFORMAS PROPUESTAS

25. En su informe (A/47/510, párr. 53), la Comisión Consultiva pidió que el Secretario General estudiara la posibilidad de llegar a acuerdos u otras disposiciones con todos los Estados Miembros con objeto de que las Naciones Unidas pudieran perseguir judicialmente a las personas culpadas de apropiación indebida de fondos y tratar de obtener reparaciones y la recuperación de los fondos.

Procedimientos civiles

26. El Secretario General considera que la incoación de procedimientos civiles para la recuperación de los fondos apropiados indebidamente podría facilitarse enmendando el Estatuto del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas con el fin de otorgarle jurisdicción para entender de demandas presentadas por la Organización contra funcionarios, de manera que sólo resultara necesario entablar procedimientos ante tribunales nacionales para garantizar el cumplimiento del fallo.

27. En virtud de su Estatuto, el Tribunal Administrativo tiene competencia para resolver demandas presentadas por funcionarios por supuesto incumplimiento de sus contratos. La Asamblea General podría enmendar el Estatuto del Tribunal para ampliar su jurisdicción según se propone en el presente informe.

28. Esa propuesta respeta la soberanía de los Estados Miembros y presenta la ventaja de reducir considerablemente las dificultades que encuentra la Organización para incoar procedimientos civiles externos. La posibilidad de conflictos jurisdiccionales se evitaría en la práctica, puesto que la intervención de los tribunales nacionales se limitaría a la aplicación de los fallos del Tribunal Administrativo. Tampoco surgirían conflictos legales sobre aspectos de fondo, puesto que el Tribunal Administrativo aplicaría la legislación interna de la Organización y las autoridades nacionales no tendrían que reexaminar los aspectos materiales del caso. Se reducirían drásticamente los elevados costos en que se incurre para aportar pruebas ante los tribunales nacionales, y sólo se necesitaría recurrir a abogados externos para lograr el cumplimiento de los fallos del tribunal. Por último, esa propuesta permitiría examinar sin restricciones todas las circunstancias de cada caso, sin menoscabo de los privilegios e inmunidades de la Organización.

29. Hace años se presentó una propuesta similar a la Asamblea General en el segundo informe del Secretario General sobre la posibilidad de establecer un tribunal administrativo único para todo el sistema común, preparado en cumplimiento de la resolución 33/119 de la Asamblea, de 19 de diciembre de 1978 (A/40/471)⁷.

30. La Asamblea General aplazó en diversas ocasiones el examen de ese informe a períodos de sesiones posteriores⁸; por último, la Quinta Comisión decidió declarar cerrado el examen de ese asunto, teniendo en cuenta la opinión expresada por los Estados Miembros de que era necesario examinar ulteriormente la cuestión en todos sus aspectos (véase el documento A/44/724, de 21 de noviembre de 1989). Por recomendación de la Quinta Comisión, la Asamblea decidió mantener, a reserva de un examen ulterior, el actual Estatuto del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, y pidió al Secretario General que volviera a examinar esa cuestión cuando procediera (decisión 44/413, de 22 de noviembre de 1989).

31. El Secretario General señala que no se ha formulado objeción alguna a la propuesta de ampliar la jurisdicción del Tribunal Administrativo, y la razón por la que la Asamblea General no aprobó la propuesta en su momento fue la falta de consenso sobre la cuestión más amplia de la unificación de los tribunales administrativos de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. El Secretario General considera que la Asamblea puede examinar la cuestión concreta de la ampliación de la jurisdicción del Tribunal independientemente de la viabilidad de establecer un tribunal administrativo único para todas las organizaciones del sistema común.

32. En lo que respecta al cumplimiento de los fallos emitidos por el Tribunal Administrativo con arreglo a esa nueva disposición, durante el examen de la propuesta se expresó la opinión de que la ampliación de la jurisdicción "no resultaría verdaderamente útil a las Naciones Unidas mientras no se pudiera lograr que los tribunales nacionales aceptaran los fallos del Tribunal, posiblemente por medio de una convención multilateral o una serie de acuerdos bilaterales con la Organización" (véase el documento A/43/704, párr. 24).

33. El Secretario General considera, sin embargo, que para obtener el reconocimiento de los fallos del Tribunal puede no ser necesario que los Estados Miembros firmen una convención bilateral o una serie de acuerdos bilaterales con la Organización. Ese resultado podría lograrse mediante una resolución de la Asamblea General en la que se recomendara que los Estados Miembros cooperaran con la Organización en esas cuestiones y promulgaran la legislación necesaria para garantizar el reconocimiento y el cumplimiento de los fallos del Tribunal Administrativo⁹. Por supuesto, en la legislación de cada Estado podrían estipularse los recursos a disposición de la parte contra la que se quiera lograr el cumplimiento del fallo del Tribunal. Sin embargo, aunque no sea posible el reconocimiento pleno y automático, diversas jurisdicciones podrían reconocer en un primer examen, la validez de esos fallos atendiendo a las pruebas presentadas al Tribunal Administrativo. Si la Asamblea General acepta en principio ese planteamiento, podría pedir al Secretario General que presentara propuestas concretas al respecto en un período de sesiones posterior, puesto que las enmiendas propuestas se suelen presentar al Tribunal, para que formule sus observaciones, antes de su presentación oficial a la Asamblea.

Procedimientos penales

34. En relación con el inicio de procedimientos penales contra ex funcionarios, el Secretario General observa que las dificultades mencionadas derivan en última instancia de las diferencias entre países en materia de derecho penal y de elementos de prueba exigidos para fundamentar una sentencia condenatoria.

/...

A pesar de varios intentos de armonizar las legislaciones nacionales y de mejorar la cooperación entre los Estados para el encauzamiento de delincuentes, subsisten problemas importantes, pues se trata de cuestiones que afectan muy directamente a la soberanía nacional. No sería razonable proponer la creación de un tribunal centralizado encargado de juzgar actos criminales cometidos contra las Naciones Unidas, ni pedir a los Estados Miembros que negociaran un convenio internacional de ámbito tan limitado.

35. Una medida factible sería la aprobación por la Asamblea General de una resolución por la que se recomendara que los Estados Miembros promulgaran legislación por la que el fraude cometido contra las Naciones Unidas por sus nacionales o por personas domiciliadas en su territorio constituyera un delito punible mediante penas adecuadas y sujeto a la jurisdicción de los tribunales nacionales. En esa resolución podría recomendarse asimismo que los Estados Miembros prestaran a la Organización y a otros Estados Miembros toda la asistencia necesaria para el procesamiento de los autores de fraudes contra las Naciones Unidas. Si la Asamblea General desea examinar ulteriormente esa opción, podría pedirse al Secretario General que preparara un informe en el que se presentaran propuestas concretas en relación con esa resolución de la Asamblea.

Notas

¹ A/47/500.

² ST/AI/155/Rev.2.

³ El artículo 49 de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (JSPB/G.4/Rev.14) dice lo siguiente:

"a) El Comité Mixto podrá recomendar la introducción de enmiendas en los presentes Estatutos a la Asamblea General, la que a su vez podrá enmendar los Estatutos después de consultar al Comité Mixto."

⁴ Resolución 22 (I) de la Asamblea General.

⁵ A saber, si los tribunales del Estado que habría de conceder la extradición se consideran competentes para entender de la causa penal; si no está en vigor ningún tratado de extradición con el país solicitante; si el país que habría de conceder la extradición considera que la pena estipulada en la legislación del país solicitante es excesiva, inhumana o inaceptable; si el acusado es ciudadano del país que habría de conceder la extradición, o cónyuge, padre o madre de un ciudadano de ese país.

⁶ Por ejemplo, la aprobación por la Asamblea General, el 14 de diciembre de 1990, de un Tratado modelo de extradición (resolución 45/116), un Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos penales (resolución 45/117), un Tratado modelo sobre la remisión del proceso en materia penal (resolución 45/118) y un Tratado modelo sobre el traspaso de la vigilancia de los delincuentes bajo condena condicional o en libertad condicional (resolución 45/119).

Notas (continuación)

⁷ El primer informe del Secretario General, titulado "Posibilidad de establecer un tribunal administrativo único" (A/C.5/39/7 y Corr.1). Por recomendación de la Quinta Comisión (A/39/842, párr. 12), la Asamblea General decidió aplazar el examen del informe a su cuadragésimo período de sesiones (decisión 39/450, de 18 de diciembre de 1984).

⁸ Decisión 40/465, de 18 de diciembre de 1985, decisión 41/447, de 5 de diciembre de 1986, resolución 42/217, de 21 de diciembre de 1987, y decisión 43/452, de 21 de diciembre de 1988.

⁹ La resolución 92 (I) de la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1946, relativa a la protección del sello y el emblema de las Naciones Unidas, en la que figura la recomendación de que los Estados Miembros tomen las medidas legislativas necesarias para impedir el uso no autorizado del nombre y el emblema oficial de las Naciones Unidas, dio lugar a la adopción de medidas legislativas pertinentes en diversos Estados Miembros (véase el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.68.V.2, vol. II, pág. 243).
